



Vientos de guerra y Reforma Tributaria

Jairo Bautista

Asesor de la Cámara de Representantes

Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia

Cuando el gobierno anunció a principios de agosto (luego de la posesión del presidente Uribe, claro está) que se empeñaría en presentar una reforma tributaria al sistema tributario colombiano, más de un incauto creyó realmente en que eso implicaba una reforma para hacer más justo y equitativo el pago de impuestos, desgravando a las clases medias y pobres, y aumentando los gravámenes al capital.

Razones para creerlo no faltaban: de cada 100 pesos que se recaudan de impuestos en Colombia se estima que al menos 60 son pagados por personas con niveles de ingreso inferiores a 4 salarios mínimos, especialmente bajo la forma del Impuesto a las Ventas y mediante el mecanismo de retenciones en la fuente. Por ende, Colombia es junto con Chile uno de los países latinoamericanos con estructuras tributarias más regresivas en donde como proporción de su ingreso pagan más los que menos tienen.

Obviamente el gobierno presentó lo que se esperaba, una reforma para rebajarle los impuestos a las grandes empresas (no a todas) y gravar más al consumo y al trabajo, que son los objetivos de todos los modelos de reforma fiscal en América Latina, inspirados en las sugerencias de los “gurus” del modelo neoliberal, no entraré a detallar sus argumentos porque espacio no alcanzaría y porque en el debate de la reforma hay temas mucho más importantes.

El primero: la improvisación de una reforma estructural. O más bien la mentira con la que se buscó darle legitimidad a una medida poco popular como la de cobrar más impuestos. El gobierno Uribe si por algo se ha destacado es por su recurrencia a las reformas tributarias para administrar un déficit fiscal que va en aumento y que ha sido causado por el mismo gobierno, que se ha ganado con la expansión del gasto los afectos de políticos y mandatarios en una política clientelar de gran escala.

El segundo: la inconsistencia entre la propuesta original y lo que se ha cocinado en las reuniones de ponentes con el gobierno. Es claro que el gobierno apostó alto para poder negociar con el Congreso, especialmente en el caso de las propuestas de gravar toda la canasta familiar con IVA, afectando de manera

lesiva a las clases más desprotegidas. Además, que la famosa reforma tributaria terminó como un remiendo de disposiciones que buscan aumentar el recaudo cuando soplan vientos de guerra más furiosos.

Cuando asumió el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que para poner a punto el aparato militar del Estado eran necesarios recursos por ¡8 billones de pesos!, obviamente una cifra exagerada desde cualquier punto de vista. Pero ese dinero no es para aumentar el pie de fuerza, sino para la compra de aviones y barcos de guerra que sirven más para un eventual conflicto externo que para la “recuperación de la soberanía del territorio y enfrentar la amenaza terrorista” como expresó en su momento el Presidente.

Y como el as bajo la manga, aparece el impuesto al patrimonio para financiar la guerra. Lo curioso es que en este sentido tal impuesto se ofrece como la única fuente de financiación para modernizar al ejército, pero la pregunta que queda en el aire es ¿Por qué los empresarios que se oponen a pagar más renta, no se oponen a pagar el impuesto al patrimonio? La respuesta es sencilla: porque el impuesto al patrimonio como lo ha demostrado la experiencia reciente lo pagan más las empresas del Estado. Si las mismas empresas que el gobierno privatiza ahora, son las que más recursos les significan porque sus estructuras patrimoniales son más fuertes que las de las empresas del sector privado, que están más expuestas a la deuda, es decir, financian una mayor parte de sus activos con deuda que con su patrimonio.

Y, finalmente, porque sería impresentable que la seguridad democrática que supuestamente ha favorecido la reactivación empresarial (reactivación que no es más que una burbuja financiera) la pagarán con IVA las clases medias y los pobres, pero dudo mucho que con solo impuestos al patrimonio se logre recaudar la asombrosa cifra y tarde que temprano querrán gravar la canasta básica familiar con IVA, porque el objetivo es uno: ganar una guerra que históricamente siempre ha quedado en tablas, con un ejército corrompido hasta en sus altas esferas del oficialato, con tropas con una baja moral, con un fenómeno paramilitar que ahora formaliza sus negocios ilegales y delinque desde las “cárceles” en las que se recluyen.

Es decir, un Estado ilegítimo con fines exclusivamente alcabaleros que quiere cobrarle impuestos hasta a los premios que reciben nuestros escasos artistas y científicos (escasos en comparación con otros países) sin más apoyo en muchos casos que su propio talento, mientras quiere mantener exentos a los sectores de sus afectos: el sector financiero, los caballistas (los caballos de paso pagan actualmente un IVA del 16%) y por supuesto los grandes terratenientes que como el propio Uribe pueden mantener grandes extensiones de tierras improductivas sin pagar mayor cosa por concepto de predial, en un modelo pecuario que como decía irónicamente el senador Gustavo Petro sirve para que “en nuestros municipios los niños sean flacos y las vacas sean gordas”

Soplan pues, nuevos vientos de guerra y suenan las monedas en los bolsillos de los colombianos para financiar la loca expedición del gobierno de turno, dudo mucho que ahora vayan a obtener algo más de lo que han obtenido hasta ahora: simples victorias pírricas.